

I.P. 3540/2025

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL, POR LA QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FORMULADA POR ---.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- ---, con fecha de 1 de octubre de 2025 formuló solicitud de acceso a la información pública en la Comunidad de Castilla y León mediante formulario electrónico habilitado al efecto, solicitando:

Declaración de cosecha de los últimos 10 años presentada por la bodega Leyenda del Páramo CIF: B24604316

En caso de que la totalidad de la información no pueda ser facilitada por razones de protección de datos personales o secreto comercial, solicito que se me entregue la información en formato anonimizado, o al menos los datos cuantitativos de producción (superficie declarada, cantidad de uva recolectada y destino de la cosecha).

Dicha solicitud fue remitida a fecha de 1 de octubre de 2025, a través de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno, a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, asignada con el número de expediente 3540/2025.

SEGUNDO.- El Servicio de Evaluación, Normativa y Procedimiento de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, requirió con fecha de 3 de octubre de 2025 la información solicitada a la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, que fue emitida con fecha de 16 de octubre de 2025.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La competencia para resolver las solicitudes de acceso a la información pública corresponde al titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León.

Mediante Orden de 4 de noviembre de 2019, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se ha delegado la firma de las órdenes que deban adoptarse en esta materia en la persona titular de la Secretaría General de la Consejería.

SEGUNDO.- Son aplicables para la tramitación y resolución de las solicitudes en materia de acceso a la información, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, y el Decreto 7/2016, de 17 de marzo, por el que se regula el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la Comunidad de Castilla y León.

En concreto, el derecho de acceso a la información pública está reconocido y regulado en el artículo 105.b) de la Constitución Española, en el artículo 12.c) del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en el artículo 13.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de

las Administraciones Públicas, en el capítulo III del título I de la LTAIBG, y en el capítulo II del título I de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la LTAIBG, la información solicitada puede ser calificada como información pública en cuanto se trata de contenidos o documentos elaborados o adquiridos por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el ejercicio de sus funciones.

CUARTO.- En relación con la información solicitada, la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, con fecha 16 de octubre de 2025 remite informe en el que precisa que a partir de la campaña 2022, *las declaraciones de cosecha son presentadas por los responsables a través de la aplicación informática “Registro de viticultores y de vino” (RVEX), disponible en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León. La información contenida en dicha aplicación tiene carácter reservado y está sujeta a las limitaciones previstas en la normativa de protección de datos y en la legislación sobre secretos comerciales.*

Por ello, añade que *no resulta posible facilitar la información individualizada solicitada, dado que contiene datos de carácter empresarial cuya difusión podría vulnerar lo dispuesto en el artículo 14.1.h) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.*

Conforme al informe referido, se constata que resulta en este caso aplicable el límite previsto en el artículo 14.1. h) de la LTAIBG, en la medida en que prevé que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para «los intereses económicos y comerciales».

En este sentido, el criterio interpretativo CI/001/2019 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno señala que, de conformidad con la Comunicación de la Comisión núm. C 325/07 de 2005, relativa a las normas de acceso al expediente de la Comisión en los supuestos de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE, los artículos 53, 54 y 57 del Acuerdo EEE, y el Reglamento (CE) nº 139/2004 del Consejo, «cuando la divulgación de información sobre la actividad económica de una empresa pueda causarle un perjuicio grave, dicha información tendrá carácter de secreto comercial», señalando como ejemplos de información que puede considerarse secreto comercial, entre otros, *las fuentes de suministro, las cantidades producidas y vendidas, las cuotas de mercado, o los ficheros de clientes y distribuidores.*

De este modo, señala el Consejo que «la solución adoptada por la Comisión europea respecto del acceso tanto a información afectada por un secreto comercial o una cláusula de confidencialidad, es denegarlo, considerando expresamente ambos supuestos como documentos o información excluida del acceso por naturaleza», solución que a su criterio «resulta perfectamente trasladable al ámbito de la aplicación del límite del art. 14.1, h) de la LTAIBG», debiendo considerarse que cuando una información solicitada constituye en todo o en parte un secreto empresarial o comercial en los términos de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, «deben negarse la publicidad o el acceso por aplicación del límite de protección de los intereses económicos y comerciales».

Concluye el Consejo que la categorización de las posiciones de un sujeto o sujetos como intereses económicos y comerciales debe hacerse caso por caso y en atención a las circunstancias concretas de cada supuesto, «pero cuando se está **en presencia de secretos comerciales o de cláusulas de confidencialidad debe entenderse en todo caso que dichos intereses concurren en el caso**». Por ello, resulta aplicable al presente caso el criterio expuesto y procede desestimar la solicitud de acceso a la información referida.



QUINTO.- El solicitante manifestó su preferencia por acceder a la información solicitada en soporte electrónico, y de acuerdo con el artículo 22.1 de la LTAIBG «el acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica», por lo que se procederá a la notificación electrónica de la presente orden.

Por todo lo expuesto, de acuerdo con los antecedentes de hecho y en base a los fundamentos de derecho citados, así como el resto de las disposiciones vigentes de general y pertinente aplicación,

RESUELVO

Desestimar la solicitud de acceso a la información solicitada por ---, por los motivos expuestos en el fundamento de derecho cuarto.

Notifíquese la presente orden al interesado, indicando que contra la misma podrá interponerse, potestativamente, reclamación ante la Comisión de Transparencia, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses computado desde el día siguiente al de su notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Valladolid, *ver fecha de firma electrónica*

LA SECRETARIA GENERAL

P.D. (*Orden de 4 de noviembre de 2019, de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural*)